
El Polvorín. El sinuoso camino de las luchas provinciales en los '90

El Polvorin. The winding path of provincial struggles in the 90's

Alejo Mayor*

Grupo de Estudios Históricos sobre Clases y Conflictos Sociales en Entre Ríos (GEHCCS-UADER) y de la Red de Observatorios de Conflictividad (ROC).

lic.alejomayor@gmail.com

RESUMEN

El objetivo del artículo es describir y analizar el ciclo de protestas en el interior del país durante los años '90, que culminó en el proceso conflictivo de diciembre de 2001 y representó un hito en los aspectos político, económico, social y cultural de la Argentina. Este proceso se inició con el retorno de la democracia en 1983, que puso fin a la convertibilidad.

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en primer lugar, realizamos una reconstrucción cronológica de las protestas, sin pretensiones de exhaustividad, para luego conceptualizarlas en base a los aportes de algunos autores. Luego nos focalizamos en la emergencia de las modalidades de protesta que adquieren centralidad durante la década: los

Palabras clave

pueblada, cortes de ruta, estallidos, ciclo de protesta

* Licenciado en Sociología (UBA) y doctorando en Ciencias Sociales (UNER). Docente e investigador, actualmente es becario doctoral por CONICET por el proyecto "¿Estallido social espontaneo o lucha popular organizada? Crisis, antagonismo y movilización social en Entre Ríos durante diciembre de 2001.". Integrante del Grupo de Estudios Históricos sobre Clases y Conflictos Sociales en Entre Ríos (GEHCCS-UADER) y de la Red de Observatorios de Conflictividad (ROC).

estallidos, las puebladas y los cortes de ruta, calles y caminos. Finalmente, analizamos las causas estructurales a fin de comprender el carácter y especificidad del ciclo. Nuestra atención recae en el modo en que se combinaron espontaneidad con organización, la matriz sindical clásica con la irrupción de otros actores, y las formas de acción “novedosas” con las “tradicionales”.

ABSTRACT

The objective of this article is to describe and analyze the cycle of protests in the interior of the country during the '90s, which culminated in the conflictive process of December 2001 and represented a milestone in the political, economic, social and cultural aspects of Argentina. This process started with the return of democracy in 1983, which put an end to convertibility.

The text is organized as follows: first, we present a chronological reconstruction of the protests, which is not intended to be exhaustive, to then conceptualize them on the basis of the contributions made by some authors. Then we focus on the emergence of different methods of protest that are at the core during the decade: outbreaks, popular rebellions and the blocking of roads and streets. Finally, we analyze the structural causes in order to understand the type and specificity of the cycle. The focal point is the combination of spontaneity and organization, the classic union matrix and the irruption of other actors, as well as the “novel” forms of action and the “traditional” ones.

Keywords

popular rebellion, roadblocks, outbreaks, protest cycle

Introducción

Luego de la caída del Muro de Berlín en 1989 y los hechos concomitantes que, cual efecto dominó, condujeron a la desintegración definitiva de la URSS –y con ella de los llamados “socialismos reales”– en 1991, las políticas neoliberales, bajo el manto legitimante del “consenso de Washington” y el discurso del “fin de la historia”, descargaron una ofensiva sobre los trabajadores. Se extremaron los márgenes de ganancia de los capitalistas, confiscando derechos adquiridos tras décadas de lucha y, en particular, a partir de las políticas desarrolladas luego de la segunda posguerra. Sudamérica y Argentina, desde ya, no fueron la excepción. En nuestro país, tras el

trauma disciplinador que constituyó la hiperinflación de 1989, los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) fueron los que realizaron dicha tarea.

Algunos de los rasgos que asumió el ajuste de la década menemista, como la descentralización de los servicios de educación y salud públicas o la privatización de las empresas de servicios públicos –con la privatización de la petrolera estatal como caso paradigmático–, trasladaron el eje de la resistencia a dichas políticas a las provincias del llamado “interior del país”. De esta manera, para Armelino (2005), el desplazamiento geográfico de las protestas sindicales, orientadas hacia los gobiernos provinciales, “se correspondió con los procesos de privatización de empresas públicas y la racionalización o reestructuración de agencias del Estado, entre ellas, las transferidas por la nación a las provincias” (Arriaga, 2021: 14). En sintonía con este “giro provincial” en la protesta, en este trabajo nos proponemos describir y analizar el ciclo de protestas¹ en el interior del país durante la década de los '90, que terminó decantando en el proceso conflictivo que estalló en diciembre de 2001. Precisamente, al cumplirse 20 años de aquellas jornadas que representaron un hito en el proceso político, económico, social y cultural de la Argentina abierto con el retorno de la democracia política en 1983 –y que puso fin al modelo de acumulación de capital basado en la convertibilidad impuesto en los '90– se han vuelto a poner en discusión algunos aspectos de dicha rebelión.

En este artículo, que entiende a la crisis del 2001 como un proceso más que un acontecimiento, partimos de la consideración de que muchos de los elementos que hicieron eclosión en el mes de diciembre se fueron ensayando durante una década de luchas y resistencias. Dicho proceso, tras la descentralización administrativa propuesta por el gobierno de Menem, se fue gestando en las provincias para luego volver como un boomerang al centro político del país. El poder destituyente que se fue construyendo de manera descentralizada y balcanizada en el territorio nacional y

¹ Entendemos al “ciclo de protestas” como una fase de intensificación de conflictos y confrontación en el sistema social que implica una veloz difusión de la acción desde los sectores más movilizados a los menos movilizados y el recurso a repertorios de acción novedosos que combinan participación organizada y no organizada (Tarrow, 1997).

que eyectó numerosos gobernadores e intendentes coronó ese proceso con la destitución del presidente de la nación.

Por lo tanto, el presente trabajo está organizado de la siguiente manera: en primer lugar, realizamos una reconstrucción cronológica de las protestas sociales en el interior del país durante los '90, de acuerdo a la bibliografía consultada a manera de síntesis bibliográfica, sin pretensiones de exhaustividad. Posteriormente las conceptualizamos retomando los aportes de algunos autores, y nos detenemos en la emergencia de las modalidades de protesta que adquieren centralidad durante la década: los estallidos, las puebladas y los cortes de ruta, calles y caminos. Finalmente, damos cuenta de las causas estructurales a fin de comprender el carácter y la especificidad del ciclo de protestas de los '90 en el interior del país. Estos son algunos interrogantes que intentaremos responder: ¿Implicaron las modalidades de protesta antes enumeradas “nuevas formas de protesta” o fueron protagonizadas por “nuevos actores”? ¿Qué hubo de “nuevo” y de “clásico” en las protestas en el interior en los noventa? ¿Cómo se dio la articulación entre la matriz sindical “clásica” y la irrupción de otros actores con otras lógicas de acción en las protestas? ¿Cómo coagularon elementos organizativos con aquellos provistos de mayores grados de espontaneidad?

Nada de calma provinciana: crisis y lucha en el interior

El año 1990 empezó con el recuerdo cercano de los saqueos que estallaron en 1989, entre mayo y junio, luego del fracaso del paquete de medidas económicas conocidas como el “Plan Primavera”. Esto ocurrió en el marco de la crisis hiperinflacionaria que pondría fin al gobierno de Alfonsín y aceleraría el cambio de mando, adelantando la asunción de Carlos Menem (PJ) como presidente de la nación (Serulnikov, 2017). Entre el 20 y 25 de febrero de 1990, se produjo una segunda oleada de saqueos, más breve y concentrada geográficamente que la anterior, aunque fue rápidamente reprimida por las policías federal y bonaerense.

Ya en ese 1990, tempranamente se hicieron observables algunos hechos de protesta que se convertirían en característicos de la dinámica conflictiva de la década: en el marco de una importante crisis provincial, una revuelta popular en Jujuy –con piquetes en puentes y vías de acceso a la capital– exigió la renuncia del por entonces gobernador Ricardo De Aparici (PJ), quien tuvo que huir hacia la Capital Federal en un avión. Este suceso en la madrugada de la década presenta a su vez cimientos en la construcción popular de un *sentido destituyente* (Gordillo, 2011) que asumirá muchos hechos conflictivos provinciales en el futuro. Dicho sentido apuntó a las cabezas de los gobiernos provinciales y municipales, en primer lugar, para ir esparciéndose por el cuerpo social nacional hasta la eclosión en las jornadas de 2001. Sin embargo, el período 1990-1992 estuvo signado por importantes derrotas del movimiento obrero y el conjunto del movimiento social en el marco de la ofensiva capitalista. Fue un “período de retroceso generalizado en el número, masividad y combatividad de las luchas y reclamos populares, y de derrota de muchos de ellos” (Laufer y Spiguel, 1999: 17).

En 1993, se empiezan a revertir –desde el punto de vista de la movilización popular– algunos elementos de reflujo de la etapa precedente a partir de una serie de importantes movilizaciones en distintas provincias, con algunas características comunes en resistencia a las llamadas “leyes ómnibus”. Estas pretendían dejar a miles de trabajadores estatales en la calle en el marco de la llamada “Reforma del Estado”. En Entre Ríos, el 21 de enero, se produce la movilización popular, encabezada y dirigida por ATE, más importante y masiva desde el retorno de la democracia. Miles de trabajadores, estudiantes, militantes de organizaciones políticas y sociales –de todo el arco político provincial– se manifestaron ante la Casa de Gobierno en contra del decreto 8706 del gobierno de Moine (PJ) que buscaba despedir a unos diez mil trabajadores. Dicha histórica movilización sentaría las bases de la organización multisectorial que finalmente lograría la reincorporación de los despedidos (Mayor, 2021). Hacia fines de ese mismo año, el nivel de conflictividad en contra de las leyes ómnibus se intensificaría. En la provincia del presidente, La Rioja, el 9 de diciembre, se movilizaron unas 3000 personas organizadas en una multisectorial, principalmente compuesta por empleados públicos. Con cacerolazos e insultos a Menem, el ministro de economía Cavallo y el gobernador Bernabé Arnaudo (PJ) protestaron contra la ley

de ajuste que pretendía despedir entre 5.000 y 10.000 empleados públicos, en los hechos que fueron conocidos como el “Riojanazo”. Se trataba de la “ley ómnibus” N° 5923, que establecía el ajuste en los tres poderes del Estado que implicarían las reformas previsional, laboral e impositiva. Los manifestantes enfrentaron gases lacrimógenos, bastonazos y balas de goma, e incendiaron la puerta principal de la casa de gobierno y una camioneta. Los hechos conflictivos se extendieron durante varios días y finalmente, los manifestantes consiguieron la derogación de la ley. Similares hechos sucederían en Chaco: la movilización popular le puso un freno al ajuste que planeaba la cesantía de 10.000 trabajadores.

Pero sin duda lo acontecido el 16 de diciembre de 1993, en Santiago del Estero, en la revuelta conocida como el “Santiagoñazo”², sería el parteaguas tanto para el gobierno nacional como para el campo del pueblo argentino. En ese imponente estallido social, en el que se prendió fuego la mismísima Casa de Gobierno, en el marco de un clima signado por la bronca producida por tres meses de salarios adeudados e indignación con la corrupción de los gobernantes, el gobernador debió escapar de los manifestantes en un autobomba del cuerpo de Bomberos para refugiarse en la sede de la Policía.

Estas puebladas expresaron el repudio al Pacto fiscal firmado por la nación y las provincias en agosto de 1993 y empezaron a mostrar algunas de las características principales que asumirían las protestas en el interior durante la década: la masividad, el carácter policlasista, la presencia de organizaciones de tipo multisectorial e intersindical, y el ataque a edificios públicos, así como la ya mencionada construcción paulatina de un sentido destituyente de las protestas. Este sentido implicaba trascender el reclamo “defensivo” de defender derechos y posiciones adquiridas previamente –como fueron las luchas contra las privatizaciones³, por ejemplo– para poner en tela de juicio la representatividad de los sectores del pueblo de parte del elenco gobernante. En puebladas como el santiagueñazo o el riojanazo, junto a los

² Para profundizar en el Santiagoñazo, ver Dargoltz (2011) o Farinetti (2017).

³ Para un análisis de la lucha contra las privatizaciones a nivel provincial (Córdoba) ver Arriaga (2021).

elementos organizativos provenientes de la matriz sindical, aparecieron también elementos con mayor grado de espontaneidad que fueron desenvolviéndose en el ardor de la protesta y produjeron acciones que difícilmente puedan pensarse como planificadas de antemano, como los saqueos o ataques a edificios públicos o domicilios particulares. Si bien estas formas de violencia colectiva (Tilly, 2006) no se encuentran desprovistas de algún grado de coordinación⁴ de los colectivos que la llevan a cabo, son interacciones sociales de carácter episódico.

En los inicios del año 1994 los trabajadores estatales protagonizaban grandes movilizaciones en las provincias de La Rioja, Jujuy, Salta, Neuquén, Chaco, Tucumán y Entre Ríos. Al santiagueño le sucedieron distintas revueltas y manifestaciones callejeras con elevado grado de violencia y contenido político. Una de ellas es la pueblada de Senillosa, primera acción de este tipo en la provincia de Neuquén y un antecedente de las que sucederían un par de años después en la provincia patagónica. Allí las acciones comenzaron con un corte de la Ruta 22 por tres días en reclamo de empleo. El contexto en la localidad a 40 km de la capital provincial estaba signado por la reciente renuncia del intendente –Raúl Bascur, MPN, por denuncias de corrupción– y la suspensión de planes nacionales por desempleo en una ciudad de seis mil habitantes donde dos mil quinientos tenían problemas de empleo (Aiziczon, 2017:147). Confluyeron en la ruta empleados estatales, docentes, municipales, comerciantes, trabajadores de la salud, concejales y funcionarios reclamando la presencia de las autoridades provinciales en la ruta. La protesta “espontánea pero organizada” presentó elementos que podrían considerarse “novedosos”, como el corte de ruta o el reclamo en torno al problema del desempleo. Sin embargo, dicha “novedad” debería matizarse, ya que el corte formaba parte del repertorio de los trabajadores neuquinos y el reclamo, más allá de la demanda, fue orientado por las acciones y articulaciones de sindicatos estatales (ATE y ATEN). Otro hecho a destacar del mismo año fue el ataque a la casa de gobierno y a la casa del gobernador en Jujuy,

⁴ Entendemos aquí, con Gramsci (2007), que no existe espontaneidad pura en la historia y que “en todo movimiento “espontáneo” hay un elemento de dirección consciente, de disciplina” (p.327). Por ende, de lo que se trata, no es de una diferencia ontológica entre espontaneidad y organización (o conciencia) sino de una gradiente.

donde los manifestantes intentaron, a su vez, ingresar en la legislatura. Como señalan Laufer y Spiguel (1999: 17), la provincia de Jujuy “sería, durante 1994 y 1995, el centro de importantes luchas de los trabajadores municipales y estatales, con gran apoyo popular y un elevado nivel de organización para enfrentar la represión policial”. También en 1994, una movilización de docentes en Salta incluyó el incendio de muebles y papeles de la legislatura. Para la coordinación y unificación de los conflictos y luchas que venían desarrollándose de manera dispersa en la provincia, fue muy importante la Marcha Federal –un hito del año 1994– que expresó el repudio a las políticas menemistas de un amplio arco político y social.

En 1995 se produjeron asaltos a edificios públicos y saqueos a comercios en San Juan, Córdoba y Río Negro –estas dos últimas gobernadas por radicales–. En Córdoba fue invadida y quemada la Casa Radical –governaba Angeloz, UCR– y se produjeron saqueos a comercios y cortes de ruta cuando la movilización sindical encabezada por la Coordinadora de Gremios Estatales se vio desbordada por organizaciones políticas y barriales (Gordillo, 2003). En Río Negro, además de los ataques a los edificios públicos, hubo ataques a las residencias privadas del gobernador saliente, Horacio Massaccesi, y al gobernador entrante, Pablo Verani, electo en el medio del conflicto (Farinetti, 2017: 179-180).

Si bien los conflictos en el ámbito público de la economía fueron los preponderantes⁵ y los que adquirieron mayor virulencia y radicalidad en sus acciones confrontativas en este momento, también se produjeron conflictos de importancia en el sector privado de la industria en el interior, como el conflicto de Continental Fuegoína, en marzo de 1995, en Tierra del Fuego. Los obreros de Continental Fuegoína, ante la inminencia del cierre de la fábrica, decidieron tomar el establecimiento y realizar una serie de acciones que concitaron el apoyo y solidaridad de la clase trabajadora fueguina y de importantes sectores de la población. La respuesta del gobierno, por su parte fue ordenar la represión y el desalojo a catorce

⁵ Según Santella (2008: 10), los sectores que más participan en las huelgas de estos años son: los docentes (con 179 huelgas entre 1989 y 1993, con 7.329.966 huelguistas), los empleados de la administración pública (160, 6.436.481), sin incluir a los municipales (con 58 huelgas, 656.030 huelguistas), los trabajadores telefónicos (37 huelgas con 289.600 huelguistas) y los ferroviarios (36 huelgas, 428.250 huelguistas).

días de la toma. El gobierno nacional envió 300 gendarmes para reforzar la represión, que produjo el “primer muerto” producto de la represión a una protesta social tras el retorno de la democracia: Víctor Choque. Resulta importante destacar la lucha de los obreros de la Continental, porque se diferencia de otros hechos en otras provincias, “fundamentalmente en dos aspectos, sus protagonistas son trabajadores del sector privado industrial y el estado provincial no presenta hasta ese momento una crisis institucional ni divisiones internas en el partido de gobierno” (Piva, 2012: 229).

En el binomio 1995-1996, como señalan Iñigo Carrera y Cotarelo (2000), se produjeron las huelgas generales que tuvieron mayor adhesión de las nueve huelgas generales nacionales llevadas a cabo durante los noventa: entre el 70 y el 90% de los trabajadores, con adhesión aún mayor en las grandes ciudades del interior del país. Estos autores destacan que dicha adhesión se realizó:

a pesar de las intimaciones y declaración de ilegalidad por parte del gobierno en los primeros paros. Y también a pesar de la presión que ejerce la superpoblación obrera, que se manifiesta en los altos índices de desocupación y subocupación: las mayores huelgas generales (1995 y 1996) se producen cuando los índices de desocupación y subocupación alcanzan sus valores más altos, sumando a casi el 30% de la población económicamente activa. (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000: 7)

Esto conduce a los autores a relativizar la emergencia de “nuevos actores” (los desocupados) y la preponderancia de “nuevas formas de acción” (los cortes o “piquetes”), remarcando la centralidad persistente de la clase obrera ocupada y de la huelga en la protesta. Sin embargo, como señala Piva (2009), el hecho de presentar la huelga general como indicador presenta el problema de sobreestimar la representación de las centrales obreras, tanto en relación con la fragmentación entre trabajadores ocupados y desocupados, como entre la acción sindical de base y de las cúpulas. Durante este período, siguen siendo los trabajadores estatales los que más se movilizan, se siguen conformando organizaciones multisectoriales a lo largo y

ancho del país para enfrentar el ajuste menemista, y se producen puebladas en San Juan y Río Negro.

Luego de la re-elección de Menem como presidente, desde el año 1996, el corte de ruta comenzó a cobrar mayor preponderancia como forma de lucha. Aquellos que consiguieron una mayor repercusión fueron los de Cutral-Co y Plaza Huincul (1996 y 1997) y Jujuy (1997). La primera pueblada en las ciudades vecinas neuquinas de Cutral-Có y Plaza Huincul fue en junio de 1996, con el reclamo por fuentes de trabajo como demanda central en torno a la cual giró la protesta. Del 20 al 27 de junio de 1996, miles de habitantes bloquearon las rutas de acceso, interrumpieron la circulación –tanto de personas como de vehículos–, construyeron barricadas y exigieron la presencia del gobernador Sapag (MPN) para discutir sus demandas. La masividad de la pueblada hizo retroceder a la Gendarmería nacional. Finalmente, Sapag debió acceder a la totalidad de las demandas presentadas por los piqueteros el 26 de junio. Un año después, en junio de 1997, las mismas localidades estuvieron literalmente sitiadas durante varios días, ante el incumplimiento de lo prometido por el gobernador. Tres meses más tarde, en Cutral-Có, unos trescientos manifestantes tomaron de rehén a autoridades de los gobiernos provincial y municipal con el reclamo de subsidios por desempleo como bandera.

Un mes antes, en mayo de 1997, había estallado la bronca en el norte del país con puebladas en Tartagal y Mosconi (Salta), y en Libertador General San Martín (Jujuy). En la pueblada de Tartagal/Mosconi, el alto grado de unidad de los distintos sectores en lucha se evidenció en la masividad de la protesta, en la organización de los piquetes, de ollas populares para sostenerlos y de autodefensa ante un hipotético enfrentamiento violento contra la gendarmería. Pero, a su vez, la pueblada se dotó de un programa que, centrado en el reclamo de puestos de trabajo y de subsidios para los desocupados, fue capaz de nutrirse y contener reivindicaciones de distintos grupos sociales –desocupados, empleados, comerciantes, empresarios madereros, etc.–. A la pueblada de estas localidades del departamento de General San Martín también se le sumaron asambleas y cortes de ruta de adhesión en la capital provincial y en la ciudad de Orán. Finalmente, el 14 de mayo a partir de la movilización se consiguen 5000

puestos de trabajo temporarios de 200 pesos mensuales, refinanciación a los deudores del Banco Nación, con el compromiso de crear más puestos laborales.

En la provincia de Jujuy, gremios de trabajadores municipales y organizaciones de desocupados realizaron veintiún cortes de ruta durante doce días, que produjeron como efecto la renuncia del gabinete ministerial completo del gobernador Ferraro (PJ). Los cortes de ruta del hecho conocido como el “Jujeñazo” se iniciaron en Libertador para luego propagarse por las poblaciones de Palpalá, Perico, Abra Pampa, Alto Comedero, Humahuaca, Tilcara, El Talar, Vialito, entre otras. En Libertador el grado de confrontación fue mayor: en el conflicto que duró doce días, los manifestantes llegaron a responder a la represión de la Gendarmería con armas de fuego. Finalmente, el 31 de mayo se dio a conocer un acta-acuerdo aceptado por el gobierno en el cual se comprometía a otorgar 12.579 puestos de trabajo. Como consignan Laufer y Spiguel (1999: 23-24):

El acta compromete un multifacético cuerpo de garantías, así como esbozos de medidas de gobierno en favor de los sectores populares, reflejo del amplísimo carácter multisectorial de los reclamos: integridad física de los "piqueteros" e indemnización a los afectados por la represión; 10 incentivos fiscales a la radicación de industrias en la provincia; efectivización del Plan Quinquenal de Obras y Servicios Públicos; entrega en 30 días y sin discriminaciones políticas de las viviendas construidas y aún no asignadas; asignación de 1.000 becas para estudiantes de la Quebrada y Puna; control de la distribución de las cajas de ayuda social por la Iglesia y la Comisión de Desocupados; adhesión a las propuestas del Frente de Gremios Estatales sobre Emergencia Impositiva; adhesión al documento del Equipo de Pastoral Social sobre tierras públicas y privadas ociosas; elevación de los subsidios por desempleo, con prioridad para las mujeres.

De acuerdo con el sociólogo Javier Auyero (2002), en esos meses, *piqueteros*, *fogoneros* y *zanjeros* –tales fueron algunas de las denominaciones que se les dieron a los protagonistas de estas acciones– cortaron la Ruta Nacional n° 3 en Trelew (Chubut), durante un día en demanda de puestos de trabajo. En Cruz

del Eje (Córdoba), vecinos y desocupados organizados en una multisectorial cortaron la Ruta Nacional n° 38. En Capitán Bermúdez (Santa Fe), por su parte, trabajadores municipales cortaron la ruta 11 en demanda de pase a planta permanente de la municipalidad y el pago de sueldos atrasados. También se consignaron cortes de ruta en las localidades de Catriel (Río Negro), Banda del Río Salí (Tucumán) y Neuquén. Como señaló el entonces gobernador de la provincia de Salta, Juan Carlos Romero (PJ), en ocasión del prolongado corte de la ruta 34 en Tartagal y General Mosconi, esta modalidad era “una práctica de acción política que se está divulgando en todo el país” (Auyero 2002: 13). En agosto-septiembre de 1997 también se consignan los primeros cortes de ruta en Entre Ríos en Paraná y Concordia. En los hechos de Neuquén, Salta y Jujuy se evidenció un grado de organización mayor de la acción contenciosa: por un lado, las formas “novedosas” de lucha como los piquetes anclaban en tradiciones combativas precedentes –que incluso en Jujuy llegó a vincularse simbólicamente con las luchas revolucionarias del siglo XIX, como veremos en el apartado siguiente–; por el otro, constituyeron mojonos de un grado de estructuración organizativo mayor que se produciría con el surgimiento del movimiento piquetero.

En el año 1999, durante seis meses (entre el 7 de junio y el 17 de diciembre), miles de correntinos –docentes, empleados estatales, abogados, empleados judiciales y otros manifestantes– realizaron un acampe en la plaza principal de la capital provincial, instalando lo que se denominaría “la plaza del aguante”. Los manifestantes, autodenominados “*placeros*”, reclamaban el pago de sus salarios –con atrasos de entre dos y cinco meses– en contra de los despidos en la administración pública y contra la corrupción de los gobiernos provincial y municipal. Al acampe, se le sumaron múltiples acciones de protesta, entre las que se destacaron los cortes del puente General Belgrano, que atraviesa el río Paraná y une la capital correntina con Resistencia, la capital de la provincia de Chaco. Precisamente con una represión salvaje sobre ese puente la Alianza realizaría uno de sus primeros hechos de relevancia al frente del ejecutivo nacional, cerrando una década de conflictos y abriendo su corto período en el gobierno que, dos años después, se vería interrumpido en el marco de una crisis económico, social y política sin precedentes en nuestro país.

Luego de esta breve reconstrucción cronológica en clave descriptiva, sin pretensiones de exhaustividad, realizamos una conceptualización de estos hechos. A tal fin, nos apoyamos en algunos autores que investigaron el período y exploramos el contexto estructural sobre el cual se asienta el proceso de beligerancia popular.

Revueltas, estallidos, puebladas y cortes de ruta. Conceptualización y contexto estructural de las protestas de la década del '90 en el interior del país

Con relación a la periodización del movimiento de las protestas sociales durante los '90, retomaremos la realizada por Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo, desde el PIMSA, atendiendo a las fases ascendentes y descendentes del mismo. De acuerdo con estos autores, el punto de partida del movimiento fueron las revueltas con saqueos a comercios de mayo-julio 1989 y febrero-marzo 1990, movimiento que no llegó a constituirse en protesta ya que no tuvo objetivos políticos y quedó entre choques entre particulares. En estos hechos de violencia colectiva, los elementos de espontaneidad tienen mayor presencia, al desbordarse las organizaciones más cristalizadas y estructuradas, que utilizan un repertorio de acciones más tradicionales.

La crisis hiperinflacionaria produjo la desarticulación de relaciones sociales, lo cual creó las condiciones para la aplicación en toda la línea de la política neoliberal, caracterizada por la privatización de empresas estatales con su efecto de "retiros voluntarios" y despidos de asalariados. La experiencia traumática de la crisis hiperinflacionaria, al decir de Svampa (2012: 25), constituyó un verdadero "punto de inflexión para la historia política nacional". Sus efectos sobre los trabajadores se manifestaron en el incremento de la desocupación (abierta o encubierta) y la disminución de los salarios. Pero hubo otros efectos importantes, como el agotamiento del modelo de integración social del peronismo, la disolución del vínculo social que implicó la vertiginosa desvalorización de la moneda nacional y el "rudo golpe al imaginario integracionista que, desde los orígenes de la república, había alimentado las y representaciones de vastos sectores sociales, incluidas las clases

medias y parte de los sectores populares” (Svampa, 2012: 27). Volveremos sobre el tema de la “integración” más adelante.

Las resistencias populares en este primer momento, si bien existieron, se encontraron aisladas, por lo que esta fase iniciada en 1989-1990 puede caracterizarse como “descendente”. El punto de inflexión de este ciclo lo constituyó el Santiagueño, el 16 de diciembre de 1993. Este hecho puede caracterizarse como *motín*, en tanto forma de lucha que se caracteriza por tener un sentimiento de indignación y venganza. Tal sentimiento se evidenció en la destrucción, incendio y saqueo de lugares de contenido altamente simbólico, como las sedes de los tres poderes y los domicilios particulares de políticos e incluso sindicalistas. Los sujetos beligerantes, no actuaron:

en tanto trabajadores estatales, estudiantes ni jubilados, sino en tanto excluidos del poder político. La organización que se dan es elemental. Líderes surgidos en el momento (algunos de ellos militantes sindicales y políticos), proponen distintas acciones y blancos de los ataques, propuestas que son aceptadas por la multitud; incluso se improvisa una asamblea, en la que se discuten rápidamente distintas propuestas. (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000: 3)

Este motín, en el cual la acción desplegada fue tendiente a evitar el empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, marcó el inicio de la fase ascendente del ciclo. En este y otros hechos similares que se reproducen en otras provincias –a los que hicimos mención en el apartado anterior– no se constituyeron desarrollos de política consciente: el elemento espontáneo de las protestas fue preponderante y la condición de excluidos fue el elemento aglutinante.

Las dos formas más generales de protesta a partir de esta fase ascendente, que los autores delimitan hasta principios de 1997, pasaron a ser los *cortes de ruta* y las *huelgas generales*. El relevamiento de PIMSA sostiene que el actor principal de estos cortes –de calle y ruta– fueron los asalariados, tanto ocupados como desocupados, de

distintas ramas de productividad, contrariamente a lo que usualmente se ha sostenido sobre los desocupados como principales protagonistas de los piquetes. Laufer y Spiguel (1999: 17) destacan que, en la oleada de puebladas y rebeliones provinciales que se desplegó en la nueva etapa de intensificación y ascenso de la movilización obrera y popular abierta por el “Santiagoñazo”, “comenzaron a recuperarse –en nuevas condiciones históricas– algunos de los rasgos que habían caracterizado en la Argentina el anterior auge de masas de las décadas del '60 y '70”. Entre estas tradiciones, es importante destacar la capacidad de organizar la autodefensa y la disposición para enfrentar a la represión, inclusive de producirle derrotas a las fuerzas represivas del Estado. Este aspecto, caro a la tradición de la lucha de clases y calles del pueblo argentino, se desarrolló con particular fuerza en la provincia de Jujuy. Al respecto, Laufer y Spiguel (1999: 29) sostienen que:

[l]a autodefensa de los cortes se realizó con la masiva utilización de piedras y hondas con proyectiles de piedra y metal. Los pobladores utilizaron pañuelos con limón, baldes con agua para neutralizar los gases, y elementos para volverlos a arrojar contra las fuerzas represivas. Se construyeron barricadas "escalonadas" a lo largo de la ruta y se utilizaron parcialmente bombas molotov. Los habitantes de Libertador (Jujuy), luego de la derrota de la gendarmería celebraron el 25 de mayo, día de la revolución de 1810 que dio origen a la lucha emancipadora en Argentina, con un desfile popular en el que homenajearon a contingentes de “piedreros”, “honderos” y “balderos” (niños y mujeres que con baldes de agua neutralizaban los gases) organizados en el curso de los enfrentamientos.

A partir de 1997 se puede trazar un límite a la fase ascendente, con una canalización electoral de demandas y mayor preponderancia de pequeños propietarios y otras fracciones de la pequeña burguesía en detrimento de los trabajadores, quienes incrementaron su aislamiento y perdieron unidad. La creación de la Alianza se produjo en este momento y será a partir de la asunción de esta alianza política al gobierno, a fines de 1999, que comenzará una nueva fase ascendente.

Otra lectura de las protestas de los '90, diferente pero complementaria con la anterior es la de Gabriela Delamata (2002). Para esta autora, la modalidad de la protesta durante esta década se transformó y se complejizó como respuesta a tres procesos analítica y políticamente identificables: a) el cambio en las reglas económicas y su impacto sobre el mundo del trabajo, b) la particular relación entre el sindicalismo y el peronismo durante los '90 y c) la emergencia de nuevas demandas y reivindicaciones que se plasmaron en nuevas formas de protesta, que pusieron en entredicho el monopolio de representación tanto sindical como político. En ese sentido, y en sintonía con el protagonismo de los asalariados que remarcan Iñigo Carrera y Cotarelo, la autora plantea que, más allá de los elementos novedosos, se trató de protestas laborales, de tipo histórico o tradicional vinculadas “por un lado, a la adquisición de la identidad política de los trabajadores, y por el otro, a la institucionalización de su acción dentro de los mecanismos de regulación y distribución del poder económico y social vigentes en Argentina”. (Delamata, 2002: 122).

Con respecto a las formas de lucha, Delamata se distancia de los investigadores de PIMSA, particularmente de la relevancia que estos le siguen otorgando a la huelga general – coincidiendo en este punto con Piva, aunque desde un planteo diferente—. Por el contrario, para la autora, en la década del '90 asistimos a una crisis de las formas tradicionales de acción: la huelga fabril y la movilización callejera. Las políticas económicas –como aquellas orientadas a controlar la inflación, el pago de las deudas públicas y la reducción del déficit fiscal, la desregulación en general de la economía y la privatización de empresas públicas– socavaron las bases estructurales de esos modos de protesta. El desmantelamiento del Estado de bienestar, por su parte, que garantizaba derechos sociales vía trabajo en un modelo basado en el pleno empleo, tornó menos eficiente la clásica estrategia de “golpear y negociar” del movimiento obrero como vía de obtención de mejoras salariales y derechos laborales. Procesos como la creciente flexibilidad en las condiciones de trabajo y la descentralización de los convenios colectivos contribuyeron considerablemente a reforzar esta tendencia.

¿Cuál fue la política de los sindicatos, reunidos mayoritariamente en la CGT, central que había protagonizado trece huelgas generales durante el gobierno de Raúl

Alfonsín? En su mayoría, tuvieron una política participacionista y garantizaron las condiciones –durante el primer gobierno de Menem– para el avance de las políticas de des-regulación del mercado laboral:

negociando con el Gobierno la subordinación de la militancia a la estrategia reformista a cambio de preservar y fortalecer las garantías corporativas para sus organizaciones. En el marco de esta negociación, los sindicatos y la CGT obtendrán concesiones de parte del Gobierno y sacarán ventajas organizacionales del proceso de reforma: activos estatales tangibles, fondos jubilatorios, participación en el mercado de obras sociales, acciones de empresas privatizadas para sus trabajadores. (Delamata, 2002: 124)

A partir del avance del apoyo de las reformas neoliberales, algunos sectores gremiales se perfilaron como un “nuevo sindicalismo” (Martucelli y Svampa, 1997) y se operó en ellos una mutación en el modo de entender la acción sindical. Pasaron así de ser representantes de los trabajadores a abocarse a una nueva identidad: la empresarial (Haidar, 2016).

El disciplinamiento social que implicó el aumento de la desocupación, la subocupación y el empleo en negro, sumados al rol de los principales sindicatos nucleados en la CGT –proceso que condujo a algunos gremios, como los principales de trabajadores estatales (ATE y los docentes de CTERA) a apartarse de la CGT y formar una central disidente (la CTA)–, fueron modificando la composición y carácter de los reclamos laborales y de la conflictividad social en el período. Estos empezaron a expresarse de manera creciente por fuera de la red gremial y mediante acciones de lucha directas diferentes a la huelga. Las formas novedosas serán centralmente dos: los estallidos sociales y los cortes de ruta. El carácter novedoso de estas formas, como ya sostuvimos, debe matizarse en función de las tradiciones de lucha específicas de cada provincia, como destacamos en el caso de Neuquén, por ejemplo, donde el corte formaba parte del repertorio de acción de trabajadores ocupados organizados sindicalmente (Aiziczon, 2017).

Las directivas de ajuste fiscal sobre las provincias que fue impulsando el gobierno nacional a partir de 1993, sin duda constituyeron un factor desencadenante de los “estallidos” provinciales, abriendo una estructura de oportunidad política (Tarrow, 1997). El disparador de las “puebladas” en el interior fue el anuncio de duros ajustes en el ámbito público provincial. A su vez, dichos ajustes, se produjeron sobre estados provinciales que se encontraban en calamitosa situación –considerados desde las esferas del capital concentrado como “inviabiles”–, que habían engrosado sus deudas públicas y, en algunos casos, se encontraban inmersos en crisis políticas e institucionales de envergadura. La combinación de políticas de ajuste y gobiernos minados de legitimidad fueron en el sustrato de los estallidos más virulentos. Fueron verdaderos ensayos a escala subnacional de las jornadas del diciembre de 2001, en las que a los trabajadores organizados sindicalmente –fundamentalmente, empleados por el Estado– y sus formas de acción se les sumaron otros actores con mayor o menor grado de organicidad. Esta alianza fue produciendo hechos de violencia colectiva, como los saqueos o ataques a edificios públicos, que, si bien contaron con un grado de organización, presentan mayores elementos de espontaneidad. En la mayoría de las provincias, empero, el sujeto beligerante que encabezó y en muchos casos dirigió la protesta fue la clase trabajadora organizada sindicalmente, sea a través de sus sindicatos, de frentes o coordinadoras intersindicales o de multisectoriales –junto a desocupados, pequeños empresarios, pequeños productores, sectores de iglesia, estudiantes, etc. dependiendo de la provincia o localidad–.

Las movilizaciones con cortes de ruta o “piquetes” aparecen con mayor fuerza entre 1996 y 1997 en diferentes provincias, del sur al norte del país, principalmente Neuquén, Jujuy y Salta. Esta modalidad de lucha fue adoptada especialmente por desocupados afectados por la privatización de alguna empresa pública –YPF, fundamentalmente– o el cierre de industrias locales. Los desocupados articularon sus movilizaciones con comerciantes y productores locales, organizaciones sociales y vecinos de las localidades con distintos reclamos, desde puestos de trabajo o subsidios a instalación de empresas o prórrogas de pagos de impuestos.

El desempleo que comenzó a generalizarse durante la década constituyó el trasfondo estructural del proceso de formación de la clase sobre el que se asentó el

creciente protagonismo de los trabajadores desocupados y otras personificaciones de distintas relaciones sociales – comerciantes, vecinos, militantes sociales, etc.– que desbordan la relación capital-trabajo asalariado y su organización clásica de parte de los trabajadores, el sindicato.

Ante la desaparición del entramado de seguridad social propio de la “sociedad salarial” (Castel, 2009), la pérdida de peso relativo del trabajo asalariado formal (“en blanco”) y el empobrecimiento de la sociedad, “la trama de bienestar que vinculaba la economía local con el trabajo formal se desmorona” (Delamata, 2002: 129). Esto dio lugar para la aparición de diferentes actores que actuaron de mediadores en la red de contención social, desde “punteros” vinculados a partidos políticos, a referentes barriales y sociales, organizaciones territoriales de distinto tipo, de desocupados, etc.

En las puebladas, o “estallidos” provinciales, así como en los cortes de ruta y movilizaciones en diferentes provincias, se actualizó el descontento de la población ante la ruptura de ese pacto social mediante el cual el Estado se erigía en garante de los derechos sociales más básicos. Esta situación se agravó en las provincias del interior debido a la crisis fiscal que supusieron las políticas de ajuste, de reducción de empleo público y la conmoción que supuso la descentralización de la educación y la salud pública.

De esta manera, encontramos los tres procesos –separados solo a nivel analítico, ya que en el contexto de la protesta se producen y refuerzan en simultaneidad– que señala Javier Auyero (2002) como característicos del contexto estructural del proceso de beligerancia popular de los noventa: la descentralización de los servicios de educación y salud públicas, la desproletarización y el desmantelamiento del estado de bienestar.

La descentralización de los servicios de educación y salud pública es de crucial importancia para entender los hechos de protesta en el interior durante los '90. Desde 1989 los servicios de educación –principalmente la educación media– y de salud comenzaron a ser transferidos desde la órbita del Estado Nacional a la provincial, lo cual profundizó la crisis de ambos sectores, ya que los gobiernos

provinciales debieron hacerse cargo con escasos recursos y en el marco de importantes crisis fiscales. Este proceso transformó a los gobiernos provinciales en objetos de demanda de parte de docentes y trabajadores de la salud, ahora sus empleados públicos, quienes trasladaron el *locus* de su protesta por salarios, condiciones de trabajo e infraestructura, del nivel nacional al provincial.

Este proceso, a su vez, se produjo en simultáneo a las transformaciones de fondo que venía sufriendo la clase obrera en particular y los sectores populares en general a nivel estructural, producto de la desindustrialización promovida por las políticas macroeconómicas que se fueron implementando en el país desde la última dictadura militar: el aumento explosivo de la desocupación, la pobreza y la desigualdad social. La tasa de desempleo subió del 5% de la población económicamente activa en 1974, al 18% en 2001 y, desde el lanzamiento del Plan de Convertibilidad en 1991, un 200% (Auyero, 2002: 28). La retirada y el desmantelamiento del Estado de su función de bienestar agravaron esta situación, que llevó a la desprotección de los sectores de más bajos ingresos: ellos sufrieron en carne propia la degradación de las condiciones de los sistemas públicos de salud, educación y vivienda.

Un fenómeno de particular impacto sobre el mundo del trabajo, tanto por su efecto directo en el aumento del desempleo como por el efecto de desarticular relaciones sociales, fue la privatización de las empresas públicas. Con respecto al impacto sobre los niveles de empleo, entre 1989 y 1999, aproximadamente 150.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajos como consecuencia directa de las privatizaciones (Auyero, 2002: 29). El caso de YPF es paradigmático, ya que muchos de los despidos se produjeron en comunidades cuyas relaciones se habían articulado en torno a las redes que entretejió la empresa en dichos territorios –el “mundo ypefeano”, al decir de Svampa y Pereyra, 2003–, como son los mencionados casos de Cutral-Có y Plaza Huinul en Neuquén, y Tartagal y General Mosconi en Salta. En algunas provincias, como en Córdoba, el embate privatizador sobre servicios públicos fue duramente resistido por los trabajadores como sucedió en el caso del agua y la electricidad, logrando frenar la privatización de este último (Arriaga, 2021). Vale decir que no se produjeron estallidos o puebladas en todas las provincias o localidades en

las que hubo profundas desarticulaciones de las relaciones sociales a partir de procesos privatizadores. La capacidad de resistencia –con mayores posibilidades de vencer– de los trabajadores de servicios públicos también fue desigual en las provincias en función de tradiciones de lucha diferentes, recursos de poder sindical (Lévesque y Murray, 2011) o la posición estratégica (Womack, 2007)⁶, pero el análisis sobre estas cuestiones excede los objetivos del presente trabajo.

Hacia el 2001...

Durante la década del '90 asistimos al inicio de un ciclo de protesta, fundamentalmente a partir del Santiagueño, que desembocó en la rebelión popular nacional de diciembre de 2001. Este proceso estuvo caracterizado por la emergencia de formas de lucha que implicaron una novedad con relación a períodos históricos previos, como las puebladas o estallidos sociales y los piquetes – cortes de ruta, calles y caminos–. Estas formas no constituyeron una ruptura total con la conflictividad social tradicional de la formación social argentina, ya que las huelgas generales continuaron siendo importantes –nueve en la década– y los trabajadores –ocupados y desocupados– fueron los principales protagonistas de las acciones, inclusive las que se presentaban como “novedosas”. Sin embargo, le imprimieron un rasgo particular al proceso de conflictividad social de la década. Resulta difícil referirse aquí a “nuevas formas de protesta” (tal vez sí para algunas modalidades como el “escrache”) sino más bien a una mayor preponderancia de un tipo de acción que se adapta a las condiciones económico-estructurales diferentes que imprime la desocupación a la clase trabajadora con una mayor capacidad de agencia.

⁶ El concepto de *recursos de poder sindical* remite a la capacidad de los trabajadores sindicalizados para defender sus objetivos mediante la acción colectiva, tomando en cuenta las condiciones estructurales sobre las que se desarrolla el conflicto. El concepto de *posición estratégica* remite a la fuerza obrera que deriva de la posición que ocupan ciertos obreros en la estructura productiva, lo que les brinda el poder de, mediante su acción, paralizar la acción de muchos otros. En el caso del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, la presencia de estos elementos, junto a la tradición combativa del sindicato, son claves explicativas del triunfo sobre la amenaza privatizadora.

Las provincias del interior del país fueron el escenario privilegiado de este proceso, acompañado por el ataque y toma de edificios públicos y, en algunos casos, a residencias privadas de políticos, en el marco de revueltas en las que se agitó la indignación popular ante la corrupción de la dirigencia en el marco de importantes crisis fiscales. El proceso de descentralización de servicios y funciones del Estado fue clave para comprender el cambio del locus de la protesta hacia las provincias del interior. La mutua imbricación entre crisis económica y fiscal y crisis de representación política –muchas veces derivada de casos de corrupción– abrió una oportunidad política para la irrupción de formas de beligerancia popular dirigidas a gobiernos provinciales y municipales que, debilitados, en muchos casos debieron presentar la renuncia de sus principales personificaciones (gobernadores, intendentes). En este sentido, en el ciclo aparecen elementos que preanuncian la crisis de diciembre de 2001 en tanto protesta que pone en tela de juicio la representación desde la acción callejera contenciosa.

La descentralización de los servicios implicó una descentralización de la protesta. Sin embargo, el proceso descentralizador en lo relativo a las formas que asumió el Estado en los noventa no fue total ni unidireccional, en el sentido de un abandono de sus funciones en los territorios del interior. A la descentralización de los servicios se le correspondió una centralización de la represión, como bien señalan Bonnet y Piva (2013). Esto se dio fundamentalmente mediante el accionar de la Gendarmería nacional como agente represor privilegiado, por lo que nos parece inadecuado hablar de “retiro del Estado”, como sostiene Auyero (2002). En todo caso, se produjo una metamorfosis del Estado en los territorios en función de las condiciones que el proceso de acumulación capital le impone a sus formas, que dejó de lado su función de “bienestar” pero acentuó su función de “gendarme”.

En lo que refiere a la disposición de los sujetos movilizados a la confrontación a la represión, el segundo cutralcazo representó un verdadero salto cualitativo al lograr infringirle una derrota a la gendarmería y a la policía en la lucha callejera. En el caso jujeño, la convergencia multisectorial llegó a bocetar en los hechos un “doble poder” en la provincia, y logró no solo impugnar y expulsar gobernadores sino hacerse cargo de la toma de decisiones mediante las asambleas, dotarse de un programa y organizar

la autodefensa. En casos como estos, algunos elementos de espontaneidad que aparecen en algunas puebladas comenzaron a cristalizarse en formas organizativas, dando cuenta de la continuidad entre “espontaneidad” y “organización” como conceptos dinámicos, que no se excluyen mutuamente sino que se entienden como una gradiente.

La entrada en una nueva etapa en el modo de acumulación de capital, con su nueva articulación entre economía y política, implicó profundos cambios en las pautas de integración y exclusión social. Es así que el hecho de sentirse “excluidos” pasa a ser la argamasa aglutinante de una miríada de sectores, antes que la identificación en tanto “asalariados”. Si pensamos, con Kessler (2011: 8), a la exclusión social como “denuncia a las promesas incumplidas de una sociedad que se pensó plenamente integrada”, debemos señalar dos cuestiones. En primer lugar, la exclusión social se plantea como problema en sociedades que presentaban elevados grados de integración y, en segundo lugar, el Estado juega un rol privilegiado en tanto proveedor y garante de los derechos sociales⁷. Dicho esto, las transformaciones en la estructura social que conducen a una creciente des-integración social, así como a las modificaciones en las políticas y carácter del Estado que, en un determinado momento histórico, dejaron de cumplir con las expectativas de la población de su territorio, produjeron una suerte de ruptura del contrato social de la sociedad argentina de la segunda posguerra, lo cual se actualizó en un descontento hacia el Estado y la dirigencia política que lo personificaba. Fue precisamente ese descontento que –a través de una década de conflictos provinciales particulares pero relacionados, en los que cada vez más sectores se involucraron en tanto actores de la protesta– constituyó un verdadero polvorín que estalló en diciembre de 2001. Significativamente expresado en la consigna “Que se vayan todos”, se manifestó en episodios de saqueos en localidades del interior del país –en el Gran Mendoza, Concordia y Rosario– en primer lugar, para luego culminar en el centro político de la nación, la Capital Federal.

⁷ Más allá que estos derechos sociales puedan y sean obtenidos mediante procesos de movilización y lucha, la relación de fuerzas resultante de estos procesos conflictivos se cristaliza en leyes y derechos consagrados por el Estado

Una posible hipótesis es que dicho proceso de desintegración social, que arrojó a situaciones de pobreza a sectores que estaban o se percibían por fuera de ella previamente –los “nuevos pobres”–, junto a la expulsión del mercado de trabajo formal de grandes contingentes de personas, fue el sustrato de la emergencia de “nuevos actores”, en tanto las formas organizacionales “clásicas” de la clase obrera, como el sindicato, no contenían las demandas ni los recursos de reclutamiento de esos sectores. Asimismo, estas situaciones impusieron otras formas de acción –no necesariamente nuevas– más efectivas para la consecución de demandas como el corte. Esto no implicó, como pudimos evidenciar en nuestra reconstrucción, la ausencia o el retiro de los sindicatos, sino que la matriz sindical se encontró al frente de las luchas en la mayoría de las provincias, fundamentalmente de la mano de los trabajadores públicos. Este proceso se favoreció por la descentralización administrativa de los '90. Trabajadores ocupados y desocupados, huelgas y cortes, sindicatos y organizaciones de desocupados, no compitieron ni se excluyeron mutuamente en las distintas situaciones concretas de las realidades subnacionales. Por el contrario, fueron conformando una fuerza social que confrontó las políticas de la avanzada neoliberal en el interior. Además, se organizaron frentes –multisectoriales, intersindicales, etc.– que tuvieron en las puebladas y estallidos el detonante social en el que todos los actores se vieron involucrados en acciones contra los gobiernos provinciales o municipales como principales apuntados, llegando a desplegar un poder destituyente en reiteradas ocasiones. En dichas revueltas se combinaron elementos organizativos con otros de mayor grado de espontaneidad. Con respecto a los primeros, fueron aportados principalmente por la matriz sindical presente –y en muchos casos al frente– y otros se fueron construyendo en la dinámica conflictual. Los segundos, en cambio, irrumpieron frecuentemente en las situaciones de violencia colectiva en las que actuaron sectores “organizados” y sectores desorganizados desde la bronca, el descontento o la exclusión.

Hemos realizado un recorrido por los procesos conflictivos de la década del '90 en el interior del país con el objetivo de realizar una síntesis bibliográfica que contribuya a reconstruir el modo en el que llegaron los sujetos beligerantes –en el proceso de constitución de una fuerza social– al 2001. Esto se produjo en un movimiento que partió de la descentralización y la dispersión a la concentración en el

centro neurálgico jurídico político de la nación en las jornadas de diciembre de ese año. Esperamos que este análisis pueda servir de punto de partida para realizar el abordaje subnacional de la crisis de 2001 en futuros trabajos.

Bibliografía

Aiziczon, Fernando. (2017). *Cultura política, militantes y movilización. Neuquén durante los años '90*. Buenos Aires: Prometeo.

Arriaga, Ana Elisa. (2021). *Hacia un 2001 sindical. Las contiendas contra la privatización de los servicios públicos en Córdoba*. Buenos Aires: Imago Mundi.

Auyero, Javier. (2002). *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Buenos Aires: Libros del Rojas.

Bonnet, Alberto y Piva, Adrián. (2013). "Un análisis en los cambios en la forma de estado en la posconvertibilidad", en Grigera, Juan (Comp.). *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*. Buenos Aires: Imago Mundi.

Castel, Robert. (2009) "Por qué la clase obrera perdió la partida", en Castel, Robert, *El ascenso de las incertidumbres*, Buenos Aires, FCE.

Dargoltz, Raúl. (2011). *El santiagueño. Crónica de una pueblada argentina*. Buenos Aires: RyR.

Delamata, Gabriela, "De los «estallidos» provinciales a la generalización de las protestas en Argentina", en *Nueva Sociedad* 182, noviembre - diciembre 2002.

Farinetti, Marina. (2017). "Día de furia en Santiago del Estero. El 16 de diciembre de 1993", en Di Meglio, Gabriel y Serulnikov, Sergio. (2017). *La larga historia de los saqueos en la Argentina*, Buenos Aires: Siglo XXI.

-
- Gordillo, Mónica. (2003). El modelo cordobés y su crisis: la caída de Angeloz en 1995. Anuario de la Escuela de Historia, Vol. III, nº 3, 249-268.
- _____. (2011). Las temporalidades del 2001. *Revista Estudios*, Nº 26 (julio-diciembre), 25-41.
- Gramsci, Antonio. (2007). "Espontaneidad y dirección consciente" en *Escritos políticos (1917-1933)*. México: Siglo XXI.
- Haidar, Julieta. (2016). El sindicalismo empresarial en los años 90. Una aproximación conceptual. *Archivos de la historia del movimiento obrero y la izquierda*, Vol. 4, Nº 8, 77-96.
- Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia. (2000) "La protesta social en los '90. Aproximación a una periodización", en *PIMSA Documento de Trabajo n° 27*.
- Kessler, Gabriel. (2011). "Exclusión social y desigualdad ¿nociones útiles para pensar la estructura social argentina?", en *Revista Laboratorio* Año 12, Nº 24, Buenos Aires, IIGG/UBA. Recuperado de: http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo/textos/Lavbo24_1.pdf
- Laufer, Rubén y Spiguel, Claudio. (1999). Las Puebladas argentinas a partir del Santiagueñazo. Tradición histórica y nuevas formas de lucha. En M. López Maya (Ed.), *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste* (pp.15-43). Venezuela: Ed. Nueva Sociedad.
- Lévesque, Christian y Murray, Gregor. (2011). Entender el poder sindical. Recursos y capacidades para la renovación del poder sindical. En *Legitimidad y poder para la renovación sindical* (pp. 3-23). Bilbao: Manu Robles y Arangiz Instituta.
- Martuccelli, Daría y Svampa, Maristella. (1997). *La plaza vacía: las transformaciones del peronismo*. Buenos Aires: Losada.

Mayor, Alejo. (2021). El pueblazo del 21 de enero de 1993: Ajuste y resistencia en Entre Ríos. En Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNCuyo, 31 de mayo al 4 de junio, Mendoza, Argentina.

Piva, Adrián. (2012). *Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista*. Buenos Aires: Biblos.

Santella, Agustín. (2008). La protesta social en los noventa en Argentina. En V Jornadas de Sociología de UNLP, La Plata, Argentina.

Serulnikov, Sergio. (2017). “Como si estuvieran comprando. Los saqueos de 1989 y la irrupción de la nueva cuestión social”, en Di Meglio, Gabriel y Serulnikov, Sergio. (2017). *La larga historia de los saqueos en la Argentina*, Buenos Aires: Siglo XXI.

Svampa, Maristella. (2012). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.

Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián. (2002) *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.

Tarrow, Sidney (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.

Tilly, Charles. (2006). *Violencia colectiva*. Barcelona: Hacer.

Womack, John. (2007). *Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros*. México: FCE.